000772

**ALEGATOS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE
COSTAS Y GASTOS INCURRIDOS POR LAS VÍCTIMAS Y SUS REPRESENTANTES EN EL
CASO BAENA RICARDO Y OTROS**

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión" o "la CIDH") se dirige a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ("la Honorable Corte") con el objeto de presentar alegatos y pruebas con relación a las costas y gastos incurridos por las víctimas en el caso de las destituciones masivas legitimadas mediante la Ley 25 de 1990, en respuesta al requerimiento de la Honorable Corte de fecha 30 de noviembre de 2000 en el cual solicitó la presentación de documentos y alegatos con relación a la solicitud de pago de costas y gastos formulada por la Comisión en nombre de las víctimas y sus representantes en el petitorio de la demanda.

La Honorable Corte ha establecido que

las costas constituyen un asunto por considerar dentro del concepto de reparación al que se refiere el artículo 63(1) de la Convención Americana puesto que derivan de la actividad naturalmente desplegada por la víctima, sus derechohabientes o sus representantes para obtener la resolución jurisdiccional en la que se reconozca la violación cometida y se fijen sus consecuencias jurídicas. Dicho de otra manera, la actividad desplegada por aquéllos para acceder a la justicia que la Convención provee implica o puede implicar erogaciones y compromisos de carácter económico que deben ser compensados a la víctima cuando se dicta sentencia condenatoria¹.

La Honorable Corte ha estimado que las costas a las que se refiere el artículo 55(1) del Reglamento comprenden los diversos gastos necesarios y razonables efectivamente realizados o causados, a cargo de la víctima o sus representantes, para acceder al sistema interamericano, según las particularidades del caso.² Asimismo, la Honorable Corte ha señalado que a estos fines el concepto de costas comprende las correspondientes a la etapa del acceso a la justicia a nivel nacional, como las que se refieren a la justicia a nivel internacional que se despliega ante la Comisión y la Corte.³

El presente escrito se basa en los alegatos y pruebas que las víctimas y sus representantes han hecho llegar a la Comisión⁴ a los efectos de dar cumplimiento a la solicitud de la Honorable Corte, en vista de que, no habiéndose dictado aun sentencia sobre el fondo, no cuentan con *locus standi* para hacer representaciones en nombre propio ante el Tribunal en virtud del artículo 23 del Reglamento vigente. A continuación se reproduce la relación de los gastos incurridos en el trámite del caso tanto ante las instancias internas como ante los órganos interamericanos de protección:

¹ Corte IDH Caso Garrido y Baigorria, Reparaciones, Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 79.

² *Ibidem*, párrafo 80.

³ *Ibidem*, párrafo 81. Ver también Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, Sentencia de 27 de noviembre de 1998, párrafo 178.

⁴ Se adjunta copia de la nota de las víctimas de fecha 8 de enero de 2001.

1. COSTAS Y GASTOS INCURRIDOS HASTA LA FECHA

A. RELACIÓN DE GASTOS

1. Gastos incurridos entre septiembre de 1991 y noviembre de 1992:

Gastos por concepto de movilización de los trabajadores de Bayano, Coclé, Colón, Chiriquí y Panamá Metro para la presentación de Demandas de Reintegro ante las Juntas de Conciliación y Decisión y los Juzgados de Trabajos en la ciudad de Panamá y movilización de los trabajadores a la presentación de la Demanda de Inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá y finalmente la demandas de reintegro ante la Sala Tercera de lo contencioso y administrativo de Corte Suprema de Justicia. Pagos por fotocopias, envío de documentos de las Demandas ante estas instancias nacionales.

Sub total en dólares o Balboas B/.13,936.69 (Ver cuadro explicativo adjunto relativo a "Gastos Incurridos por los Compañeros de la Ley 25")

2. Gastos incurridos entre julio de 1994 y marzo de 1995:

Gastos de transporte y alimentación por trámites de la demanda internacional ante la Comisión Interamericana, Gastos de la Ley 25, a reuniones informativas, gastos de papelerías, fotocopias, envío de documentos del proceso internacional y gastos de viajes de Coordinación a San José, Costa Rica (CEJIL - Mesoamérica) de los compañeros Manrique Mejía, Ladislao Carabálo y Rafael Yopez (coordinadores Ley 25) con la Lic. Elena Escalante y Marcela Matamoros.

Sub total en dólares o Balboas B/.1,994.00 (ver cuadro adjunto relativo a "Gastos Incurridos por los trabajadores despedidos por la Ley 25")

3. Gastos incurridos entre septiembre de 1996 y julio de 2000:

Gastos de viajes a Washington DC de la Lic. Minerva Gómez (Asesora de los despedidos de la Ley 25) el señor Manrique Mejía (Coordinador de los Despedidos de la Ley 25) y el señor Rafael Lascano (ex Secretario de Defensa del SIT@) con motivo de la audiencia celebrada ante la CIDH durante el período ordinario de sesiones de octubre de 1996, con motivo de las reuniones convocadas por la CIDH en la etapa correspondiente al intento de solución amistosa del asunto, durante los meses de noviembre y diciembre de 1996 y febrero de 1997.

Gastos de viaje de los señores Rolando Gómez y Luis Batista a la ciudad de Washington DC, viajes a San José de Costa Rica de los señores Rolando Gómez, Fernando Gaona y José Arosemena (ex- Secretario General del SITIESPA) a San José de Costa Rica con motivo de las audiencias sobre excepciones preliminares y fondo ante la Corte Interamericana. Viajes de los señores María Sánchez, Lidia Marín y Alfonso Chambers del INTEL, de los señores Salvador Vela y Francisco Chacón del MOP y del señor Euribiades Marín del INRENARE, con motivo de las audiencias sobre excepciones preliminares y fondo ante la Corte Interamericana.

_____ : _____

Gastos de papeleo y trámites correspondientes a la interposición de la demanda.

Sub total en dólares o Balboas BI.21,541.50 (Ver cuadro adjunto relativo a "Gastos de viajes a Washington y Costa Rica, notas del ASEMOP - ASE@NARE (Fotocopias de Cheques) y del comisionado de la Ley 25 del INTEL (Alfonso Charnbers).

4. Gastos incurridos entre diciembre de 1996 y febrero de 1998:

Gastos por llamadas internacionales a las oficinas de CEJIL Meso América, CEJIL Washington, la Secretaría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ORIT, SITET. Envíos vía fax, comunicaciones telefónicas internacionales, comunicaciones a sindicatos internacionales.

Subtotal dólares o balboas BI.1.579.66

Las víctimas y sus representantes consideran que el total de gastos asciende a **B/.39,051.86**

B. RELACIÓN DE COSTAS

La Licenciada Minerva Gómez ha prestado asesoramiento legal a las 270 víctimas de la Ley 25 en la presentación y trámite de caso 11.325 ante el Sistema Interamericano desde el mes de octubre de 1993. Conforme a su mandato la Licenciada Gómez brindó consejo legal en la elaboración de escritos, la compilación de documentos, la participación en audiencias, así como para el cabildeo del caso ante las instancias internacionales. Las víctimas han resumido las gestiones de la Lic. Minerva Gómez durante el trámite del caso de la manera que se detalla a continuación:

El 18 de enero de 1994 se presentó la denuncia ante la Comisión, desde esa fecha hasta Junio de 1994, la Licenciada Gómez nos asesoró y elaboró escritos para sustentar ante la Comisión nuestra petición, la cual fue admitida en Junio de 1994.

En julio de 1994, conjuntamente con los abogados de CEJIL/Mesoamérica y CEJIL/Washington, elaboró escritos y presentó nueva documentación para sustentar nuestra denuncia ante la Comisión. Asimismo, nos asesoró en la elaboración de las observaciones a las respuestas dadas por el Estado Panameño y participa en conversaciones con personeros del mismo, a fin de lograr una solución amistosa y justa al caso, acorde con nuestras aspiraciones. Dicha solución amistosa no fue posible dado el poco interés de los representantes del Gobierno. En consecuencia, por medio de la Licda. Minerva Gómez, en mayo de 1996 se inició un trabajo de cabildeo ante los Miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a fin de obtener una audiencia, la cual finalmente fue concedida para las sesiones a realizarse en octubre de ese mismo año. En esa audiencia el Gobierno se comprometió, por medio de su delegado Dr. Adolfo Ahumada, a iniciar un período de solución amistosa.

La Licenciada Minerva Gómez, conjuntamente con los abogados de CEJIL/Washington, nos acompañó y asesoró en las reuniones efectuadas a solicitud de la Comisión, en los meses de Noviembre y Diciembre de 1996 y Febrero de 1997, reunión en la cual dimos por terminada la etapa de solución amistosa, debido al poco interés del Gobierno en llegar a la misma.

██████████ : ██████████ ██████████ ██████████

A partir de marzo de 1997, buscó conjuntamente con CEJIL que la Comisión expidiera un Informe Artículo 50, el cual fue aprobado y enviado al Estado Panameño en Octubre de 1997. También trabajó en la elaboración de escritos y argumentos para la presentación del caso ante la H. Corte. En la demanda del caso ante la Corte, la Comisión designó a la Licenciada Gómez como asistente de la Comisión en los trámites de la demanda ante la Corte. En esa condición participó conjuntamente con CEJIL en la elaboración de los escritos de demanda, de contestación a las excepciones preliminares, de observaciones a la contestación de la demanda por parte del Estado; en la recopilación de información; y en el asesoramiento en la audiencia de las excepciones preliminares en enero de 1999, así como en la audiencia de fondo y la preparación de interrogatorios a los testigos.

En atención a lo expuesto y en consulta hechas por cada uno de los Comisionados de la Ley 25 del INTEL-IRHE, Autoridad Portuaria Nacional, Cemento Bayano, MOP, INRENARE, Ministerio de Educación a la mayoría de las víctimas de la Ley 25 de 1990, éstas últimas consideran que las costas por asesoría en el proceso de la Licda. Minerva Gómez, deben ser estipuladas en la suma de ciento cincuenta mil balboas (B/.150.000.00).

En vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión ratifica el contenido de su demanda y las pretensiones allí contenidas y solicita a la Honorable Corte que ordene a la República de Panamá reparar a las víctimas en este caso por el daño sufrido, así como efectuar el pago de costas y reembolsar los gastos incurridos por las víctimas para litigar este caso tanto en ámbito interno como ante la Comisión y la Honorable Corte.

2. COSTAS INCURRIDAS EN LA ETAPA DE REPARACIONES ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y OTROS GASTOS EN LOS QUE SE INCURRIRIA PARA LA DEFENSA DE LA CAUSA EN ESTE PROCESO

A partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Corte, el 1 de enero de 1997, la víctima de un caso tiene *locus standi* en la etapa de reparaciones, y "puede presentar sus argumentos de forma autónoma". La Comisión valora este cambio en el procedimiento como un reflejo de la necesidad de que el sistema avance hacia la representación directa de las víctimas en todas las etapas del procedimiento en un caso contencioso. Además, esta participación es esencial para la presentación adecuada del caso. Si bien la Comisión es siempre la parte actuante en las fases preliminares y de méritos del caso, la atribución de legitimación procesal al representante de la víctima reconoce que los intereses institucionales de aquella y los individuales de éste, pueden no coincidir. La Comisión no procura un otorgamiento de costas para cubrir su propia actuación en la tramitación y presentación del caso, y concurre con la Corte en que ello está previsto en su presupuesto (Véase, en general, Aloeboetoe, par. 114, El Amparo, par. 63, Neira Alegria, par. 41). El papel de los abogados de la víctima es representar y proteger los intereses de ésta. Para que sea realmente efectivo el derecho de las víctimas a la representación procesal en la etapa de reparaciones en un caso contencioso, deben preservarse sus intereses a través de las etapas preliminar y de méritos del caso. Ni las víctimas, ni sus abogados, deben estar obligados a costear los gastos vinculados a una representación jurídica que es necesaria para hacer efectiva la justicia cuando esta ha sido denegada por el Estado afectado y cuando se reclama en un monto razonable. Por lo tanto, las costas y gastos incurridos en la etapa de reparaciones debe tenerse también en cuenta a la hora de fijar las indemnizaciones por este concepto.

_____ : _____

Sin embargo, en el presente caso, la Honorable Corte no ha dictado, a la fecha, su sentencia sobre el fondo. La Honorable Corte solicitó a la Comisión, en su nota de 30 de noviembre de 2000, que presentara, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Corte, "los documentos de prueba que, hasta la fecha, acrediten la solicitud [de pago de costas y gastos presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el petitorio de su escrito de demanda en el caso Baena Ricardo y otros] de referencia, y los alegatos correspondientes." En consecuencia, la Comisión se ha limitado pues, en el presente escrito, a fijar los principios generales que estima deben ser aplicables al caso que nos ocupa, y se limita a sugerir a la Honorable Corte que deberá tener en consideración, al momento de fijar los montos y los gastos a futuro que eventualmente deban realizarse para la asistencia del abogado y las partes a la ciudad de San José de Costa Rica en las oportunidades en que se les cite a sesiones para seguir adelante con el examen del presente caso. La Comisión se reserva, pues, en nombre de los representantes de las víctimas, que carecen de *locus standi* en esta etapa del procedimiento, el derecho de efectuar nuevas alegaciones sobre costas y gastos futuros, en los que pueda incurrirse, en su caso, en la fase de reparaciones, así como de reclamar en su momento las indemnizaciones que estime pertinentes por los daños sufridos.

3. CONCLUSIÓN Y PETITORIO

La Comisión transmite a la Honorable Corte la información solicitada en su escrito de 30 de Noviembre de 2000 de conformidad con el artículo 44 del Reglamento de la Corte, rogándole se sirva aceptar, en aplicación del artículo 26 (1) de dicho Reglamento, la recepción diferida de los documentos de prueba que hacen referencia al presente caso, y que le serán remitidos el 9 de Enero de 2001, dentro de los plazos fijados por dicho artículo.

Por todo lo expuesto, la Comisión solicita de la Honorable Corte:

Tenga por presentado en tiempo y forma este escrito sobre gastos y costas incurridos hasta la fecha, por parte de la víctimas del caso Baena Ricardo y otros, y relativos al caso de referencia.

Tome nota de que la Comisión se reserva el derecho, en nombre de las víctimas del presente caso y sus representantes, de efectuar nuevas alegaciones sobre costas y gastos futuros, en los que pueda incurrirse, en su caso, en la fase de reparaciones, así como de reclamar en su momento las indemnizaciones que estime pertinentes por los daños morales y materiales sufridos.

_____ : _____